

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO TREINTA DE FAMILIA

Bogotá D. C., diez (10) de diciembre de dos mil veinte (2020)

Rad: 11001-31-100-30-2020-00459-00

Clase de proceso: Acción de Tutela

Procede este Despacho a proferir sentencia dentro de la Acción de Tutela instaurada por el ciudadano **MARIO ARTURO CABEZAS FERRIN** identificado con la C.C 12.908.251 en calidad de agente oficioso de **BEATRIZ ISABEL CABEZAS FERRIN** con C.C 50.663.994 en contra de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**.

ANTECEDENTES

El ciudadano **MARIO ARTURO CABEZAS FERRIN** identificado con la C.C 12.908.251 en calidad de agente oficioso de **BEATRIZ ISABEL CABEZAS FERRIN** con C.C 50.663.994, inicia acción de tutela en contra de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**; por considerar que se le están vulnerando el derecho fundamental de **igualdad ante la ley, seguridad social y respeto a la dignidad humana**.

HECHOS Y PRETENSIONES

Refiere que, mediante la Resolución No. 007148, la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, negó la pensión de invalidez a favor de **BEATRIZ ISABEL CABEZAS FERRIN**, dentro del proceso administrativo adelantado ante la accionada, siendo el causante **FRANCISCO LEONICIO CABEZAS CABEZAS**, padre de la agenciada.

Manifiesta que a **BEATRIZ ISABEL CABEZAS FERRIN**, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, le determino una pérdida de capacidad laboral del 55.60% el 30 de octubre de 2008.

En razón a lo anterior pretende que el Juzgado tutele los derechos fundamentales de **igualdad ante la ley, seguridad social y respeto a la dignidad humana**, y proceda a

su salvaguarda; ordenando a la accionada el pago de los derechos pensionales por Invalidez con su respectivo retroactivo a favor de **BEATRIZ ISABEL CABEZAS FERRIN**.

PRUEBAS

- Copia del fallo proferido por el Juzgado segundo de familia, el 22 de julio de 2010.
- Copia respuesta final derecho de petición expedido por el Hospital Occidente de Kennedy III Nivel ESE.
- Resolución UGM 007148 08 de septiembre de 2011 – Caja de Previsión Social EICE
- EN LIQUIDACIÓN.

ACTUACIÓN PROCESAL

1.- Admitida la tutela el 30 de noviembre de 2020, se ordenó la notificación a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, para que en el término de dos (2) días se pronunciara sobre los hechos materia de la presente acción.

2.- El 01 de diciembre de 2020, se notificó a través del correo institucional del Juzgado a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, informando sobre la admisión de la presente tutela, adjuntando copia de la referida solicitud.

3.-La **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, dentro del término legal oportuno procedió a dar contestación a la presente acción constitucional.

CONTESTACIÓN ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.

La entidad accionada, refirió: “ la ausencia de la petición significa a su vez la inexistencia de la acción u omisión en cabeza de Colpensiones, acontecimiento que resulta determinante para declarar la IMPROCEDENCIA de la acción como es del caso, en que la señora BEATRIZ ISABEL CABEZAS FERRIN, acudió a la vía de tutela para obtener el reconocimiento de una pensión de invalidez sin haber si quiera elevado solicitud, ni haber allegado la documentación que acredite su titularidad”.

CONSIDERACIONES

Aspectos preliminares

Este Juzgado es competente para conocer de la presente acción, por mandato de los artículos 86 de la Constitución Nacional, 37 del Decreto 2591 de 1991; numeral 1°, inciso 2°, del Decreto 1382 de 2000; y 38 de la Ley 489 de 1998.

La solicitud satisface las formalidades legales y no se advierten anomalías que invaliden lo actuado, lo cual habilita al Despacho para decidir de fondo el asunto.

Naturaleza jurídica de la acción de tutela

La jurisprudencia constitucional ha pregonado de antaño que la acción de tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una vía sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jurídico ha consagrado para salvaguardarlos.

Es claro, entonces, que este instrumento judicial se torna improcedente cuando la persona afectada tuvo o tiene la oportunidad de obtener la protección del derecho que estima amenazado, por los cauces ordinarios y ante las autoridades competentes, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela.

En sentencia T-072/19 la Corte Constitucional, reseñó: “A partir del principio de igual reconocimiento ante la ley, resulta imperativo que el juez constitucional interprete la figura de la agencia oficiosa buscando favorecer la capacidad jurídica de las personas mayores de edad en condición de discapacidad, a efectos de preservar su autonomía y voluntad. Para tal efecto, en lo que respecta al requisito de la imposibilidad de interponer el recurso de amparo, se deberá entrar a analizar las circunstancias del caso concreto y las barreras de participación efectiva en la sociedad que se derivan para el titular de los derechos, sin que el solo diagnóstico de una enfermedad cognitiva o psicosocial, sea un indicio suficiente para derivar el impedimento en una actuación directa. En otras palabras, el juez constitucional debe velar porque existan escenarios en los que las personas con discapacidad, en virtud de su capacidad jurídica, se apropien de sus derechos y de la facultad para proceder a su ejercicio, con miras a fortalecer su independencia e inclusión en la vida social”.

En el sub lite, el ciudadano **MARIO ARTURO CABEZAS FERRIN** identificado con la C.C 12.908.251 en calidad de agente oficioso de **BEATRIZ ISABEL CABEZAS FERRIN** con C.C 50.663.994, acreditó con la copia de la sentencia de interdicción, proferida por el Juzgado segundo de familia, la incapacidad en la que encuentra

BEATRIZ ISABEL CABEZAS FERRIN; en consecuencia, se considera en este escenario constitucional que el agente oficioso se encuentra legitimado por activa para solicitar el amparo de los derechos fundamentales **igualdad ante la ley, seguridad social y respeto a la dignidad humana**.

Por su parte, la legitimación por pasiva dentro del trámite de amparo hace referencia a la capacidad legal del destinatario de la acción de tutela para ser demandado, pues está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental en el evento en que se acredite la misma en el proceso. En el asunto de la referencia, la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** hace parte del Sistema General de Pensiones y tiene por objeto la administración estatal del Régimen de Prima Media con Prestación Definida y la administración del Sistema de Ahorro de Beneficios Económicos Periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005 y las demás prestaciones especiales que determine la Constitución y la Ley, en su calidad de Entidad financiera de carácter especial¹; y es en el caso bajo estudio la entidad a quien se endilga el actuar vulnerador de los derechos invocados por el accionante.

INMEDIATEZ

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela puede interponerse “en todo momento” porque no tiene término de caducidad.

La Corte Constitucional en Sentencia T-044/19 señaló, frente a este requisito: “El requisito de la inmediatez pretende entonces que exista “una correlación temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales”, de manera que se preserve la naturaleza de la acción de tutela, concebida como un remedio de aplicación urgente que demanda una protección efectiva y actual de los derechos invocados.

Sobre el particular es preciso señalar que el accionante en su escrito de tutela, aludió que en resolución No. 007148 del 08 de septiembre de 2011, la Administradora de pensiones negó la pensión de invalidez a favor de la agenciada; a razón de lo anterior, considera la Juzgadora que el mecanismo subsidiario de tutela no se interpuso dentro de un término razonable.

SUBSIDIARIEDAD

El Decreto 2591 de 1991 establece expresamente que solo procede la tutela cuando “el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”. Entonces, la procedencia de la acción se encuentra condicionada por el principio de subsidiariedad, bajo el entendido de que no puede desplazar los recursos ordinarios o extraordinarios de defensa, ni

¹ Tomado de la página oficial de la Colpensiones.

mucho menos a los jueces competentes en la jurisdicción ordinaria o contencioso administrativa.

Derecho Fundamental Invocado Como Vulnerado

DERECHO FUNDAMENTAL SEGURIDAD SOCIAL

“El artículo 48 de la Carta Política, dispone que la seguridad social es un derecho irrenunciable y un servicio público en cabeza del Estado, que debe garantizarse a todas las personas “en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad”. Para esta Corporación la seguridad social es un derecho de raigambre fundamental, que debe ser definido de la siguiente manera: “conjunto de medidas institucionales tendientes a brindar progresivamente a los individuos y sus familias las garantías necesarias frente a los distintos riesgos sociales que puedan afectar su capacidad y oportunidad, en orden a generar los recursos suficientes para una subsistencia acorde con la dignidad del ser humano”. (Sentencia T-043/2019).

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO.

Corresponde a esta Juzgadora determinar si la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**, con su actuar se encuentra vulnerando los derechos fundamentales a la **igualdad ante la ley, seguridad social y respeto a la dignidad humana** invocados por el ciudadano **MARIO ARTURO CABEZAS FERRIN** identificado con la C.C 12.908.251 en calidad de agente oficioso de **BEATRIZ ISABEL CABEZAS FERRIN** con C.C 50.663.994, al no proceder al pago de los derechos pensionales por Invalidez con su respectivo retroactivo a favor de **BEATRIZ ISABEL CABEZAS FERRIN**.

Junto con el escrito de la tutela se arrió:

Resolución No. UGM 007148 del 08 de septiembre de 2011, mediante la cual se resolvió negar la solicitud de sustitución pensional a la señora **BEATRIZ ISABEL CABEZAS FERRIN**.

El accionado en la contestación, aludió: “Frente a los hechos de la acción de tutela se puede inferir, que una vez revisados los sistemas de información con los que cuenta Colpensiones, no se logró evidenciar petición alguna radicada por la accionante. 2.Revisado el escrito de tutela, se evidencia que no obra dentro del mismo, medio de prueba que controvierta dicho hecho, por el contrario, solo se evidencia la mera pretensión del accionante en adquirir el derecho pensional a través de la acción constitucional. 3.Se insta al accionante para que se acerque a un punto de atención al ciudadano (PAC), para que diligencie los formularios establecidos por la entidad, con la documentación requerida, para posteriormente realizar el estudio de su pensión de

Invalidez. Por las razones que exponaremos a continuación, usted su señoría podrá concluir que no existe vulneración alguna por parte de –COLPENSIONES-a los derechos fundamentales alegados por el accionante, a su vez manifestaremos que la acción de tutela no es la vía para lograr lo pretendido por la señora BEATRIZ ISABEL CABEZAS FERRIN”.

Respecto del requisito de subsidiariedad ha indicado la Corte Constitucional en Sentencia T- 359/19: “Según lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 5º, 6º y 8º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial, subsidiario y sumario, al que puede acudir cualquier persona cuando sus derechos fundamentales resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión en que incurra cualquier autoridad pública o un particular, esto último, en los casos específicamente previstos por el Legislador.

En razón del carácter subsidiario de la tutela, esta procede en dos situaciones: *(i) cuando en el ordenamiento jurídico no existan otros mecanismos de defensa judicial, idóneos y eficaces, para la protección de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados; y (ii) cuando, a pesar de su existencia, el accionante se encuentra expuesto a la consumación de un perjuicio irremediable, evento en el cual, en principio, el amparo sería de carácter transitorio.* El subrayado pertenece al Juzgado.

En contraste, la tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, idóneos y eficaces, y no exista la posibilidad de consumación de un perjuicio irremediable. Lo anterior, entendiendo que el mecanismo judicial resulta *idóneo* cuando (i) se encuentre regulado para resolver la controversia judicial y (ii) permita la protección de las garantías superiores. La *eficacia* se relaciona con la oportunidad de esta protección”.

En el caso en concreto considera el Despacho que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, teniendo en cuenta que *(i) Existe otro mecanismo de defensa judicial idóneo y efectivo.*; por lo que el Despacho evidencia que la accionante cuenta con los mecanismos de defensa judicial ante la jurisdicción ordinaria, los cuales son idóneos y eficaces, para resolver este tipo de controversias judiciales y, por su naturaleza, permiten una respuesta oportuna de la administración de justicia.

Aunado a lo anterior, no se evidencia en el sub júdece el riesgo de consumación de un perjuicio irremediable.

En Sentencia T- 359/19 la Corte Constitucional indicó frente al perjuicio irremediable: “para tener la connotación de irremediable debe ser “(i) **inminente**, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) **grave**, esto es, que el

daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean **urgentes**; y (iv) la acción de tutela sea **impostergable** a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad”.

Aunado a lo anterior, en Sentencia T 046/2019 se reseñó por la Honorable Corte Constitucional: “Por otra parte, el Tribunal Constitucional se ha referido a la procedencia de la acción de tutela contra decisiones emitidas por las entidades administradoras de pensiones y ha determinado que, en esos casos, es necesario demostrar: (i) un grado mínimo de diligencia por parte del accionante al solicitar la protección del derecho invocado y (ii) la afectación del mínimo vital.”.

En la presente instancia constitucional no fue allegada documental que acredite que el ciudadano **MARIO ARTURO CABEZAS FERRIN** identificado con la C.C 12.908.251 en calidad de agente oficioso de **BEATRIZ ISABEL CABEZAS FERRIN** con C.C 50.663.994; haya elevado petición alguna tendiente a pretender el derecho pensional que solicita a través de este mecanismo subsidiario; y de otro lado tampoco demostró la afectación al mínimo vital de la agenciada; así las cosas, no se encuentra superado el requisito de subsidiariedad.

Tampoco, en el caso bajo análisis, ni los hechos mencionados en la demanda ni las pruebas allegadas al expediente, evidencian que la agenciada se encuentre expuesta a un riesgo inminente y grave, que exija medidas urgentes e impostergables, al punto de que el juez constitucional deba asumir la competencia del juez ordinario, exceptuando la subsidiariedad de la acción de tutela.

De las anteriores actuaciones, no se advierte que el accionado **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES** se encuentre desplegando actuar que vulnere y/o ponga en riesgos los derechos fundamentales invocados por el agente oficioso de **BEATRIZ ISABEL CABEZAS FERRIN**.

EN MÉRITO DE LO EXPUESTO, EL JUZGADO TREINTA DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C., ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada el ciudadano **MARIO ARTURO CABEZAS FERRIN** identificado con la C.C 12.908.251 en calidad de agente oficioso de **BEATRIZ ISABEL CABEZAS FERRIN** con C.C 50.663.994 en contra de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**.

SEGUNDO: Contra el presente fallo procede impugnación por la vía jerárquica.

TERCERO: Remitir el expediente a la Honorable Corte Constitucional, para la eventual revisión del fallo de tutela, en caso de no ser impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

CUARTO: Notificar esta decisión a las partes por el medio más expedito. Líbrense comunicaciones.

NOTIFÍQUESE,

Firmado Por:

VIVIANA MARCELA PORRAS PORRAS

JUEZ

**JUEZ - JUZGADO 030 DE CIRCUITO FAMILIA DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-
SANTAFE DE BOGOTA D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

6c421d43cb902f8136c691e4987be7f4d5659a1fd71e50f2878d640f0d3df04e

Documento generado en 10/12/2020 04:48:37 p.m.

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**